RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO NOVENO CIVIL DE CIRCUITO DE BOGOTÁ
Bogotá D.C., Julio cinco (5) de dos mil veintidós (2022)

PROCESO No. : 2018-00886 01
CLASE DE PROCESO : VERBAL.
DEMANDANTE : EULISES ESTUPIÑÁN
MONTOYA.
DEMANDADO : RICARDO MUÑOZ
VELÁZQUEZ & OTROS.
ASUNTO : SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA

OBJETO A DECIDIR

Fenecidas las etapas correspondientes al proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual iniciado por el señor EULISES ESTUPIÑÁN MONTOYA, en contra de RICARDO MUÑOZ VELÁZQUEZ, JOSÉ WILSON OSPINA GÓMEZ, TRANSPORTES Y LOGÍSTICA OSPINA CAMIONES SAS y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, procede el Despacho a decidir lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por los extremos procesales, en contra de la sentencia del *a-quo*.

ANTECEDENTES

La demanda

Por medio de apoderado judicial, debidamente constituido para el efecto, el demandante mencionado interpuso demanda verbal, a fin de que fueran concedidas las siguientes pretensiones:

1. Que se declare que el Señor RICARDO MUÑOZ VELÁZQUEZ es responsable por el accidente de tránsito acontecido el día 1º de

noviembre de 2017 y descrito en el acápite de los hechos, como conductor del vehículo.

2. Que se declare que JOSÉ WILSON OSPINA GÓMEZ y TRANSPORTES Y LOGÍSTICA OSPINA CAMIONES SAS son responsables por el accidente de tránsito acontecido el día 1º de noviembre de 2017 y descrito en el acápite de los hechos, como propietario y empresa vinculante, respectivamente.

3. Que se declare que LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS es responsable por el accidente de tránsito acontecido el día 1º de noviembre de 2017 y descrito en el acápite de los hechos, como aseguradora del vehículo de placas TJV-420.

4. Que, como consecuencia de lo anterior, se condene solidariamente a los demandados RICARDO MUÑOZ VELÁZQUEZ, JOSÉ WILSON OSPINA GÓMEZ, TRANSPORTES Y LOGÍSTICA OSPINA CAMIONES SAS y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a pagar al Señor EULISES ESTUPIÑÁN MONTOYA una vez este ejecutoriada la sentencia las siguientes cantidades por los perjuicios materiales y morales causados, de la siguiente forma:

a) La suma de \$6'300.000 M/cte., por concepto de daño emergente que corresponden al desembolso que por concepto de deducible del seguro hizo el demandante para el arreglo de su vehículo y el pago de salarios al conductor del bus.

b) La suma de \$42'283.800 por concepto de lucro cesante, correspondiente a lo dejado de percibir diariamente por el bus desde el 1º al 26 de noviembre de 2017.

c) La suma de \$20'000.000 por concepto de perjuicio moral, ocasionado por ver afectado su forma de sustento.

d) La suma de \$20'000.000, por concepto de daños a la vida en relación, porque le fue arrebatado el goce y usufructo que ostentaba, más aún, el señorío que se mostraba por su calidad de propietario.

Fundamentos de hecho

En sustento de las anteriores pretensiones, se afirmó en el escrito de la demanda que, el día 1º de noviembre de 2017, en la Paila Jurisdicción de Armenia-Quindío, aproximadamente en el km 16, colisionaron los vehículos de placas TJV-420, conducido por el señor Ricardo Muñoz Velázquez y el vehículo de placas WLK-332, por el Alexander Corredor Niño contratado para ello.

Señala que el accidente fue responsabilidad del conductor Ricardo Muñoz Velázquez, tal y como fue declarado en informe policial para accidentes de tránsito, por no mantener distancia de seguridad, violando las normas del código de tránsito (hipótesis la causal 121), maniobra que originó el accidente de tránsito que dió lugar al transbordo de todos los pasajeros del vehículo conducido por el señor Alexander Corredor Niño a otro bus que pertenecía a la misma empresa transportadora.

Afirmó el gestor judicial del actor, que debido al accidente, los daños del bus de placa WLK-332 fueron asumidos por la aseguradora, sin embargo, tuvo que cancelar el deducible y un valor equivalente a un salario mensual a Alexander Corredor Niño como conductor del bus contratado para ello. Sostuvo que tras llevar al vehículo para su reparación al Taller JAL, donde permaneció desde el 1º al 26 de noviembre de 2017, dejó de percibir por consiguiente la suma de \$1.626.300 diarios.

Finalmente, hace consistir su indemnización de los perjuicios morales, a razón del dolor, aflicción, congojas, angustias, tristezas

y pesares que padeció por no contar con su herramienta de trabajo, aunado al daño a la vida en relación.

Admisión y *litis contestatio*

Por medio de proveído de 17 de octubre de 2018, el Juzgado 19 Civil Municipal de esta ciudad, admitió la anterior demanda y ordenó correr traslado a la parte pasiva para que ejerciera la correspondiente defensa (fl. 47 Cdno 1).

Mediante providencia de 24 de julio de 2019, se admitió la reforma a la demanda de debidamente integrada en un solo escrito, se ordenó la notificación a los demandados y el traslado a los mismos por el término de ley (Folios 132 a 144 Cdno 1).

Dentro del término legal, los señores **JOSÉ WILSON OSPINA GÓMEZ Y RICARDO MUÑOZ VELÁSQUEZ**, contestaron la demanda, formulando la siguiente excepción de mérito:

“INDEBIDA ESTIMACIÓN DEL PERJUICIO PATRIMONIAL”

Sostiene esta defensa que el demandante no allegó como prueba documental, el recibo de pago generado por la compañía de seguros que acreditara la cancelación del deducible al que se hace referencia en las pretensiones del libelo, pues tan solo aportó una constancia emitida por el Taller JAL, que certifica que el vehículo de placa WLK-332 estuvo en reparación en el periodo indicado, siendo incoherente que ahora se pretenda el reintegro de lo pagado por concepto de reparación.

Sumado, expone, que en lo que tiene que ver con el pago del salario del conductor del bus, si bien la parte actora allegó una certificación expedida por la Flota Magdalena S.A, lo cierto es que, aquella no establece de forma clara y concisa el vínculo laboral o

contractual que tenía el demandante con los supuestos dos conductores, sin que se hubiese aportado algún recibo de nómina, pago de seguridad social, transacción o cualquier otra prueba que permitiera establecer la existencia de tal erogación (Folios 145 a 179 y 170 a 173 Cdno 1).

Adicionalmente, los demandados llamaron en garantía a la Compañía Previsora S.A Compañía S.A, apoyados en que el bus involucrado en el accidente estaba asegurado con una póliza de seguro de automóviles, amparando el caso de responsabilidad civil extracontractual relacionada con daño a bienes de terceros y lesiones personales, correspondiente a la póliza No. 3003416 y vigente para la fecha del accidente (Folios 1 a 23 Cdno 2).

La también demandada **PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, dentro del término legal, formulo las siguientes defensas (Folios 149 a 157 y 35 a 45 Cdno. 2):

1. "EXCLUSIÓN DE AMPARO RESPECTO DE LA PÓLIZA 3004316".

Se fundamenta esta excepción en que el contrato de seguro contenido de la póliza 3004316 existen unas causales de exclusión al amparo de responsabilidad civil extracontractual, cuando se trata de hechos ocasionados a partir del incumplimiento de normas de tránsito por parte de quien conduce el vehículo asegurado, sin que sea deber suyo el pago de las indemnizaciones solicitadas de encontrarse probada la responsabilidad en cabeza del demandado Ricardo Muñoz Velázquez.

2. "LÍMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDAD, CONDICIONES DEL SEGURO Y DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO".

Con base en que no es posible ordenar el pago en un monto superior al asegurado en la póliza, tal y como lo establece el clausulado general identificado como AUP-002.

3. EXCEPCIÓN GENÉRICA

Fundada está en las previsiones del artículo 282 del C.G.P.

La sociedad **TRANSPORTE Y LOGÍSTICA OSPINA CAMIONES S.A.S**, se notificó en la forma prevista en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, quien dentro del término legal no contestó el libelo ni formuló excepciones.

Sentencia de primera instancia

El Juzgado Diecinueve Civil Municipal de esta ciudad, por medio de sentencia de 6 de agosto de 2021, resolvió no declarar probadas las excepciones planteadas por la llamada en garantía LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, relacionadas con la "*exclusión de amparo respecto de la póliza 3004316*" y "*límites máximos de responsabilidad, condiciones del seguro y disponibilidad del valor asegurado*"; declaró parcialmente probada la excepción de mérito denominada: "*indebida estimación del perjuicio patrimonial*", propuesta por la apoderada judicial de los demandados Ricardo Muñoz Velázquez y José Wilson Ospina Gómez y en esa línea, declaró civil y solidariamente responsable del accidente a los demandados por los perjuicios que sufrió el demandante, y los condenó al pago de la suma de \$21'654.717, como perjuicios materiales y \$908.526, como perjuicios morales.

Argumentos en que se sustenta la alzada

Inconforme con la decisión adoptada por el *a quo*, la parte demandante y la llamada en garantía interpusieron recurso de apelación. Lo propio lo hizo la parte demandada, quien también se

adhirió al recurso, lo cual explica la presencia del expediente en esta sede judicial.

El sustento de la alzada, se circunscribe a solicitar, por los involucrados en este litigio, a la revocatoria del numeral sexto de la sentencia de primer grado, mediante el cual se condenó el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales, que a título de daño emergente y lucro cesante solicitó el actor.

Sostienen los demandados que el *a-quo* incurrió en error, en la medida en que no se probó dentro del proceso, con la certificación expedida por la Flota Magdalena S.A, la forma clara y concisa el vínculo laboral o contractual que tenía el demandante con los supuestos dos conductores, sin que se hubiese aportado algún recibo de nómina, pago de seguridad social, transacción o cualquier otra prueba que permitiera establecer la existencia de tal gasto, ni tampoco el producido real del bus.

No se tuvo en cuenta que en las declaraciones que emitió la familia del demandante, indicaron que el señor Eulises Estupiñán Montoya contaba con otros buses, pues su actividad económica dependía del servicio de transporte, como tampoco que el vehículo de placas WLK-332 permaneció menos de un mes en el taller. No se probó el lucro cesante, en tanto que solo partió de los dichos del demandante, sin tener en cuenta que la compañía aseguradora, canceló en su mayoría los daños causados al bus de propiedad del actor.

La parte demandante se adhirió al recurso de apelación, ello con la finalidad de alcanzar el ajuste de las condenas, en la medida en que se probó con la certificación expedida por Allianz Seguros un valor por concepto de deducible por \$4.300.000, siendo éste, el monto que canceló para el arreglo de los daños ocasionados al automotor de placa WLK-332, la cual no fue tachada de falsa, ni fue objeto de reclamación a la hora de estimarla bajo juramento.

En cuanto a los perjuicios morales, estimo que no atendió los testimonios de su familia para fundamentar dicho agravio, pues no tuvo en cuenta que de ellos se dedujo que para la época del accidente, el bien constituía su único patrimonio y que pagaba un crédito que había constituido sobre el vehículo, lo que se vio comprometido su estado anímico.

CONSIDERACIONES

Empieza este Juzgado por admitir su competencia para proferir el presente fallo, con base en el juicioso cumplimiento del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil; el libelo cumple con los requisitos contemplados en el artículo 82 del Estatuto Procesal, y los sujetos intervinientes cuentan con la capacidad jurídica y procesal para ser partes. Todo lo anterior da vía para que pueda dictarse la respectiva decisión de fondo.

Primeramente, como el disentimiento de los intervinientes en el litigio radica exclusivamente a cuestionar lo decidido por la juzgadora en lo referente a la condena por perjuicios materiales y morales, que a título de daño emergente y lucro cesante solicitó el actor, procederá el Despacho a hacer un exordio únicamente a ese tema del que trata esta litis, con la finalidad de llegar a las conclusiones que en derecho correspondan.

El daño material, se tiene definido como aquél que afecta el patrimonio de la víctima y produce en éste una mengua económica, bien por ganancias dejadas de recibir, caso en el cual se habla de lucro cesante, o bien por gastos o erogaciones que ha tenido que realizar como consecuencia del daño recibido, caso en el cual se habla de daño emergente.

El "*lucro cesante*" a que se refiere el artículo 1614 de la ley sustantiva, se define como "*la ganancia o provecho que dejó de*

reportarse”, tal definición contiene dos conceptos distintos como especies de un mismo género, toda vez que por *“ganancia”* se entiende la utilidad lucrativa, consistente en dinero o en cosas, provenientes de una fuerza de trabajo o de un capital, y por *“provecho”* se entiende todo beneficio que cualquier situación de la vida le reporta a una persona.

Resulta menester indicar que la súplica, reducida a una cifra concreta, no puede aceptarse como definitiva sin que antes el juzgador valore los medios probatorios que se encaminen a respaldarla y sin que de manera previa estudie si por la situación de la víctima es posible o no reconocer aquel concepto, resultando de vital trascendencia tener en cuenta que de acuerdo a los parámetros indicados en el artículo 167 del Código General del Proceso, corresponde el peso de la prueba de los perjuicios a quien demanda la indemnización.

El perjuicio para que sea indemnizable ha de reunir los requisitos de ser cierto, directo y previsto. Es cierto cuando es efectivo y real, eso es, no hipotético o meramente probable. Es directo cuando es consecuencia del hecho intencional o culposo, en tal forma que supuesto éste necesariamente tenía que producirse aquel. Y es previsto cuando es la consecuencia natural del hecho lesivo, no algo excepcional, y por demás, imposible de mirar cuando el hecho fue cometido.

Ahora, sobre las sumas de dinero que hubiere podido recibir el afectado en caso de no haber ocurrido el hecho dañoso, con apoyo a lo normado en los Arts. 1613 y 1614 del Código Civil, se tiene que para reconocer el *“lucro cesante”*, por su propia índole, no puede operar sino dentro de severas restricciones, las que según la jurisprudencia se concretan así:

“(...) En otras palabras, toca al demandante darse a la tarea, exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su propia

iniciativa y con la mayor aproximación que sea factible según las circunstancias del caso, tanto los elementos de hecho que producen el menoscabo patrimonial del cual se queja como su magnitud, siendo entendido que las deficiencias probatorias en estos aspectos de ordinario terminarán gravitando en contra de aquél con arreglo al Art. 177 del c de P.C.” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, 4 de marzo de 1998).

De acuerdo con estas premisas de orden legal, ninguna discusión despierta la suma señalada en el fallo como daño emergente, según equivale a \$1.839.626.00, pues dicho rubro se encuentra acreditado en el proceso de conformidad con el certificado expedido por la contadora de la empresa de transportes FLOTA MAGDALENA S.A en el que se constata que el demandante Eulises Estupiñán Montoya canceló dicha suma, la que no fue tachada de falsa, y goza de toda la validez probatoria (Folio 134 Cdno. 1).

En efecto, al examinar el documento aducido como su sustento probatorio, se establece el ingreso mensual que el señor Eulises canceló por concepto de: *"nómina de 2 conductores por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE (\$1.839.626,00) incluido prestaciones sociales durante el periodo comprendido de noviembre 1 al 16 de noviembre de 2017. Estando el vehículo fuera de servicio por accidente".* Y si bien, dicha certificación no da cuenta de una relación laboral, de la cual se pueda extraer el pago de determinado salario, lo cierto es que, tal documento se corrobora que dicha empresa transportadora certificó que el demandante le canceló tales rubros, máxime cuando en el interrogatorio recepcionado por ese extremo procesal se advirtió que tal suma se la descontaban mensualmente del producido del vehículo que él recibía, por lo que en efecto, correspondió a un gasto que tuvo que asumir por el accidente.

Ahora bien, en lo que atañe al valor del deducible, a la verdad, al margen de que el extremo actor aportó un “*certificado de seguro de Auto Colectivo Pesado*” expedida por Allianz Seguros en la que se señala como asegurado principal al señor Eulises Estupiñán Montoya, un valor asegurado por concepto de daños de menor cuantía por \$256.100.000, un concepto de deducible por \$4.300.000,00, y que lo hubiese estimado el demandante como un perjuicio a voces de la artículo 206 del C.G.P., no se puede perder de vista, que no se cuenta con ningún respaldo probatorio, situación que de suyo proscribire su reconocimiento como parte de la indemnización, que permita inferir que el demandante efectivamente canceló el valor del deducible; rezan en efecto la constancia vista a folios 6 y 7 del cuaderno 1, en el que da cuenta que el demandante suscribió un contrato de seguro y que el vehículo de placa WLK-332, fue objeto de arreglo, luego del siniestro, sin embargo, no se allegó un instrumento idóneo para establecer que el actor en verdad sufragó tal erogación, desde luego que si el demandante canceló dicho valor y, antes bien, estima que cumplió con el deber aseguratorio, debió así demostrarlo, como bien lo indicó el *a-quo*.

Luego, la mera certificación del valor del deducible carece de la virtualidad de acrisolar un requerimiento indemnizatorio, pues para esto debe acompañarse de las pruebas del demerito patrimonial, que en el *sub examine*, consistía verbo y gracia, en la factura del deducible cancelado, u otra probanza que acreditara el hecho, carga que no puede calificarse como imposible ni impeditiva de los derechos de los beneficiarios del contrato del seguro.

La prueba faltante tampoco podía extraerse de la constancia expedida por el taller mecánico JAL que dio cuenta del arreglo y costo del vehículo de propiedad del demandante, militante a folio 132 del cuaderno 1, no solo porque no se establece el *quantum* del daño, sino porque no ofrece datos sobre el menoscabo padecido por el valor del deducible. La simple afirmación, de que se aportó

una certificación de Alianza Seguros en donde se relaciona el valor del deducible, mal podría generar certidumbre sobre su pago, por carecer de fundamentación.

El testimonio absuelto del propietario del establecimiento de comercio, el señor Jorge Alberto Lagos Camargo, tampoco demuestra que, el demandante hubiera realizado dicho pago, pues el deponente fue categórico en señalar, el 23 de julio de 2021, de forma expresa que expidió una factura, pero que, sin embargo, no tenía claro el valor por el que fue otorgada.

Como resultado, ante la ausencia de los soportes que permitiera develar el detrimento patrimonial reclamado por este concepto, dable era concluir que se no se podía incluir la suma de \$4.300.000 en su modalidad de daño emergente, por lo que la interpretación del juzgado de primera instancia no puede calificarse como contraevidente, descartándose un yerro en la tasación de dicho perjuicio por falta o indebida valoración probatoria.

En lo que se relaciona con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, condensado por la demanda en los ingresos que dejó de percibir durante el tiempo que duró el rodante de placas WLX-332 en reparación de carrocería en el TALER JAL, los empeños probatorios de la parte demandante en punto de los ingresos que dejó de percibir hasta antes del hecho que generó el daño y que con ocasión al mismo por un tiempo dejaron de ingresar a su patrimonio, resultaron afortunados; pues alegándose en la demanda que dejó de percibir una suma que lindaba \$42.283.800,00, obra a folio 5 del cuaderno 1, la certificación proveniente de la FLOTA MAGDALENA S.A, empresa a la cual se encuentra afiliado el vehículo de propiedad del demandante, que certifica que por el servicio de transporte de pasajeros y encomiendas recibe un producido bruto mensual de \$48'789.000, a razón de \$1'626.300 diarios, por lo que, a no

dudarlo, permite concretar, con la certidumbre que ese aspecto litigioso reclama, a cuánto ascendían los ingresos que por ello percibía el actor por el rodante vinculado a esa empresa transportadora, algo que, desde luego, en el caso que ahora reclama una precisión, se debía descontar unos gastos que de forma mensual se generaban por la operación del vehículo y, que por tanto, no podían ser incluidos en dicha indemnización, como bien lo realizó el juez de primera instancia.

Lo cual significa, que si el quiebre de la sentencia de primer grado se ha dado justamente porque no taso correctamente los perjuicios irrogados, tal cosa no fue así, pues al resultado dañoso cuya reparación se demanda se advirtió, no solo la culpa de los demandados, sino también, en las probanzas aportadas al plenario, por lo que es apenas obvio que el fallo de primer a instancia deba confirmarse, pues se tomó en consideración esos referidos aspectos.

Frente a lo discurrido por la llamada en garantía, en lo atinente a que no se probó el lucro cesante, resulta *menester* indicar que *no le asiste razón*, en la medida en que a voces del artículo 1088 del código de comercio resultaría inexorable en tratándose de este tipo especial de seguro, vale decir, de responsabilidad civil, regulado específicamente por los artículos 1127 y siguientes del código de comercio, despojarse de su obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales en su integridad, que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra, *por lo que*, no es dable al asegurador entrar en distinciones como la que plantea la llamada en garantía, tanto menos cuando ello contraviene los dictados hermenéuticos que orientan la materia(art 1613 del C.C.)

En punto a las inconformidades del apelante respecto o de los perjuicios morales, imperioso resulta recordar que la prueba de este tipo de perjuicio corresponde a la discreción judicial devenida de reglas de la experiencia, como "*las repercusiones económicas*

de las angustias o impactos psicológicos” (perjuicios morales objetivados), y *“la angustia, dolor, malestar que sufre por el impacto emocional del daño”* (perjuicios morales subjetivos o “pretium doloris”)¹, lo cual se puede desvirtuar si es que se demuestra que tal aflicción no se presentó, cosa que no aconteció.

En este caso el Despacho considera que las repercusiones de orden moral sufridas por el actor y que tiene que ver con los daños ocasionados a su vehículo de placas WLK -332, como consecuencia del accidente de tránsito que revelan los autos, son suficientes para presumir la causación del daño moral y, por tanto, resulta razonable la decisión que realizó el juez de primer grado para proceder a tasar los perjuicios morales en las sumas conocidas.

Así las cosas, se concluye que la sentencia del *a-quo* habrá de confirmarse, pues la misma se ajusta a los lineamientos legales previstos para el caso del reconocimiento de los perjuicios reclamados.

DECISIÓN

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el Juzgado Noveno Civil de Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

Primero: **CONFIRMAR** la sentencia proferida el 6 de agosto de 2021, por el Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá, D.C., por las razones expuestas en la motiva de esta providencia. -

Segundo: **CONDENAR** en costas a la parte apelante. En su oportunidad, liquídense por la Secretaría. Inclúyase la suma de \$2500000.00, por concepto de agencias en derecho.

¹ MARTÍNEZ RAVÉ, Gilberto. Responsabilidad civil extracontractual en Colombia, Biblioteca Jurídica DIKE. Novena edición, 1996. p. 96.

Tercero: **DEVOLVER** el proceso al Juzgado de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUISA MYRIAM LIZARAZO RICAURTE
JUEZ

eba

Firmado Por:

Luisa Myriam Lizarazo Ricaurte
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 009
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 1db8d89d38f3d0eef88406d54844b8f1bfd627e82c1acd090f75e4ef3dc54bb9

Documento generado en 06/07/2022 07:43:42 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>